

Responsabilidad del Estado colombiano por la omisión en el cumplimiento de la función resocializadora de la pena

Responsibility of the Colombian State for the Omission to Comply with the Resocializing Function of the Penalty

DOI: <https://doi.org/10.18041/0124-0102/a.42.13012>

Resumen

Con el advenimiento y entrada en vigor de la Constitución Política de 1991 se le da una connotación distinta a la responsabilidad del Estado colombiano frente a la función resocializadora de la pena, con el fin de proporcionar a los reclusos el tratamiento adecuado y las herramientas para su futura reinserción social. Sin embargo, los múltiples delitos que se cometen en la colectividad y el hacinamiento en los centros carcelarios demuestran que los índices de reincidencia de conductas punibles van en aumento, como consecuencia directa de las pocas garantías y la ineficacia de las políticas de reincorporación a la sociedad y de la corrupción.

En esta investigación se formula el siguiente problema jurídico: ¿cuál es la responsabilidad del Estado colombiano por la omisión en la función resocializadora de la pena? Para dar solución a este interrogante se utilizó una metodología cualitativa de tipo jurídico-dogmático, enmarcada en la revisión documental y algunas entrevistas a presidiarios para recolectar información, lo que permitió contextualizar las condiciones del sistema penitenciario para la aplicabilidad de estos programas, con el fin de establecer el grado de responsabilidad del Estado en el cumplimiento de la política resocializadora. Se llega a la conclusión de que urge un replan-

Abstract

With the advent and entry into force of the 1991 Constitution, the State's responsibility for the Colombian resocialization function of punishment was given a different connotation, with the goal of providing inmates with appropriate treatment and the tools for their future social reintegration. However, the multiple crimes committed in the community and the overcrowding in prisons demonstrate that the recidivism rates for punishable offenses are increasing as a direct consequence of the limited protections and the ineffectiveness of social reintegration policies and corruption.

For this research, it is necessary to formulate the following legal problem: What is the responsibility of the Colombian State for its failure to fulfill the resocialization function of punishment? To address this issue, a qualitative, dogmatic legal methodology was used, based on a documentary review and interviews with inmates to gather information. This allowed us to contextualize the conditions of the penitentiary system for the applicability of these programs, with the goal of establishing the degree of State responsibility in fulfilling the resocialization policy.

Which ultimately leads to the conclusion that a rethinking and restructuring of

Carlos Mario Hoyos Morales

*Abogado. Asesor de la
Dirección General de la DIAN.
choyosmorales@gmail.com*

Como citar:

Hoyos, M. C. (2024). Responsabilidad del Estado colombiano por la omisión en el cumplimiento de la función resocializadora de la pena. *Advocatus*, 21(42), 37-55, 6. <https://doi.org/10.18041/0124-0102/a.42.13012>



Open Access

Recibido:


3 de septiembre de 2023

Aceptado:

9 de enero 2024

Publicado:

22 de enero 2024



teamiento y reestructuración de la política rehabilitadora con fundamento en las realidades sociales e institucionales que no permiten la reeducación de los condenados.

Palabras claves: responsabilidad, Estado, omisión, resocialización de la pena, reincidencia, condenado, sistema penitenciario, centro carcelario, derechos fundamentales.

rehabilitation policy is urgently needed, based on the social and institutional realities that do not allow for the re-education of convicted prisoners.

Keywords: responsibility, State, omission, resocialization of punishment, Recidivism, convicted person, prison system, prison center, fundamental rights.

I. INTRODUCCIÓN

Este trabajo de investigación pretende establecer los parámetros de declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado colombiano frente a la omisión en el cumplimiento de las políticas de rehabilitación penal, preceptuadas al tenor literal en el Código Penitenciario y Carcelario, en adelante (CPC), toda vez que dicha obligación, siendo de carácter constitucional, tiene como “finalidad el tratamiento penitenciario con el propósito de alcanzar la reinserción del infractor de la ley penal” (Ley 65 de 1993, art. 10).

En este contexto, la Dirección de Política Criminal (DPC) del Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia (Ministerio de Justicia, 2020) expone los fundamentos orientados al análisis de los elementos jurídicos que sustentan la política criminal con enfoque reintegrador, así como la legitimidad de las penas privativas de la libertad, en consonancia con los fines esenciales del Estado.

Esta política señala los principios rectores u orientadores, como el servicio social, el acatamiento de deberes y derechos constitucionalmente establecidos en Colombia, lo cual refleja la adopción de un modelo de rehabilitación penal jerárquico y coherente con los postulados del Estado Social de Derecho (Ministerio de Justicia, 2020).

Este modelo reconoce la dignidad humana como eje central de la intervención estatal frente a las personas privadas de la libertad,

permitiendo así un enfoque penal con carácter transformador y restaurativo. Dicho enfoque se orienta tanto a la protección de los derechos de los ciudadanos en general, como a los de aquellos cuya presunción de inocencia ha sido desvirtuada mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, así como a quienes se encuentran sometidos a una medida de aseguramiento privativa de la libertad, ya sea en establecimiento carcelario o en el lugar de residencia fijado por el imputado.

La principal problemática de la responsabilidad del Estado frente al cumplimiento de la función rehabilitadora de la pena surge a partir de las complejas y diversas dinámicas sociales existentes que no permiten el desarrollo pleno de los procesos de reincorporación en la colectividad.

Ante una negligencia u omisión en la prestación del servicio de resocialización del individuo en la sociedad, ya sea a través de la existencia de una renuncia al poder o como una acción entendida como un deber negativo y positivo, al Estado se le puede atribuir una responsabilidad por la falla del servicio, que sería el título de imputación idóneo mediante el cual se puede endilgar la responsabilidad del aparato estatal.

La Corte Constitucional, en adelante (CC), en su jurisprudencia, estableció que el impacto negativo generado por la desarticulación interinstitucional y una política criminal fragmentada llevan a transgredir los derechos orientados a la igualdad y al goce de los demás derechos fundamentales, como la dignidad

humana, vida y salud de los reclusos, pues las condiciones deficientes del servicio sanitario, el hacinamiento y la poca gestión de recursos para asistir el servicio de salud, la remodelación y adecuación de las instalaciones carcelarias, no permiten reeducar la población carcelaria y mucho menos prepararla para afrontar en debida forma los conflictos sociales (Corte Constitucional, Sentencia T-762 de 2015).

Con base en lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, en adelante (CSJ), en su basto precedente, indica lo siguiente:

Quando el operador judicial impone a una persona una pena, luego de aplicar los principios de proporcionalidad, idoneidad y necesidad en sentido estricto y esta es privativa de la libertad, bien sea intramural o domiciliaria, por haber sido condenada o por recaer sobre ella una medida de aseguramiento de privación de libertad en establecimiento carcelario que limite su libertad de locomoción; el Estado asume la responsabilidad de resocializarla, a través de la implementación de un sistema progresivo que permite que una vez superado, la persona acceda nuevamente a su libertad; toda vez que, el efecto de la finalidad de la pena tras de ser preventivo, es incidir en la lucha contra la delincuencia, como presupuesto de protección del patrimonio jurídico en cabeza de los asociados. (C.S.J., Sala de casación penal, Sentencia SP33254-2013).

Cucanchón (2022) considera que toda actividad comercial ilegal asociada al narcotráfico es uno de los mayores generadores de con-

ductas punibles más comunes en Colombia. El incremento del fenómeno de la reincidencia se da en delitos como cultivo, fabricación, comercialización y consumo de drogas, menoscabando la seguridad de los ciudadanos e incrementando los niveles de violencia y crisis social en diversas formas, convirtiéndose en uno de los mayores retos para la reinserción. En tal virtud, el modelo de política criminal “debería estar encaminado en la prevención del delito, y elemento neurálgico debería ser el apoyo y cuidado de la salud mental de las personas privadas de la libertad y no en el aumento de las penas cuando los delitos se cometen” (p. 5), como también lo mencionan Chávez y Sarmiento (2021) sobre la “dureza de las penas en virtud del populismo punitivo, el hacinamiento carcelario, la falta de cupos en los planes de reincorporación, la ausencia de personal y recursos para la ejecución de las fases de tratamiento penitenciario, entre otros” (p. 4).

Adicionalmente, Contreras y Sandoval (2020) reiteran el vacío normativo en temas de la reeducación de los condenados y procesados, el alto nivel de corrupción y los malos tratos que reciben los reclusos en las instalaciones penitenciarias, “un Estado de cosas inconstitucionales, así como las falencias estructurales y jurídicas, que actúan como limitantes en los procesos de rehabilitación de los condenados e impidiendo la reintegración positiva y productiva de este en la sociedad” (p. 20).

Así las cosas, se hace imperioso analizar el concepto de falla del servicio por parte del

Estado, si es o no aplicable ante la ineficaz materialización de un tratamiento penitenciario resocializador que posibilita la transgresión continua del ordenamiento jurídico penal, quedando en una delgada línea la responsabilidad estatal como prestador de servicios y garante de los derechos fundamentales de la colectividad.

Esta investigación tiene como objetivo general establecer la responsabilidad del Estado colombiano en el cumplimiento de la función resocializadora de la pena. Para cumplirlo se desarrollan los siguientes objetivos específicos: identificar la naturaleza jurídica de la función reintegradora de la pena, analizar los avances y retrocesos del sistema jurídico penitenciario en relación con la función inclusiva de la pena y establecer la relación jurídica entre responsabilidad estatal y reincidencia de la pena. El papel del Estado queda enmarcado con la obligación de reeducación del privado de manera justa de la libertad y su posterior incorporación a la vida social una vez cumplida su condena, lo que se convierte en beneficios para la comunidad. Abandonar tal enfoque hace que el sistema penitenciario y carcelario se convierta en un sistema multiplicador de conflictos, lo que finalmente trasciende a mayores daños hacia el conglomerado económico y social.

II. METODOLOGÍA

La investigación es teórico-dogmática desde una perspectiva jurídica, que según Tantaleán Odar (2016), se traduce en el estudio de las

estructuras de derecho objetivo, por lo que se basa esencialmente en fuentes formales. En consecuencia, si se atiende al concepto de investigación de Tantaleán Odar y de la concepción que le atribuyen al derecho objetivo Morineau (1953, p. 136), que lo concibe como “la norma, el precepto que regula la conducta humana”, y De Pina (1980, p. 62), según el cual es “el conjunto de normas que forman el sistema jurídico positivo”, se restringirían las investigaciones teóricas únicamente a la propia norma jurídica y su contenido. Sin embargo, el concepto de Tantaleán Odar alude a las fuentes formales y como sabemos éstas se integran no sólo por las normas positivas mencionadas.

En esta investigación se analiza rigurosamente el grado de responsabilidad del Estado colombiano, en cuanto al tratamiento del sistema penitenciario en el país, en lo que respecta a la función reincorporativa de la pena, a la vez que las condiciones del sistema para su aplicabilidad.

En ese orden de ideas, a través de la investigación jurídica se busca encontrar en sus propósitos argumentos en la ley, consultando en el ámbito científico problemas de orden judicial que permitan la recopilación de la información. El enfoque de este estudio se hace a través del razonamiento inductivo y deductivo, con carácter descriptivo y documental. Además, se utilizaron fuentes primarias y secundarias para lograr un análisis de los hechos y la síntesis de los resultados.

Siendo este un estudio de investigación con enfoque cualitativo, apoyado en la recolección de la información en documentales, jurisprudencia, leyes, artículos de investigación penal, bibliográfica y algunas entrevistas a personas vinculadas a los procesos de resocialización de la pena, permite contextualizar las condiciones y el cumplimiento, tanto positivo como negativo, del modelo de readaptación por parte del Estado y su responsabilidad.

Se recurrió a alternativas para extraer información real sobre los programas de reincorporación y así poder confrontarlos con la teoría y las normas establecidas. Se realizaron entrevistas a 16 personas, de las cuales 6 purgan condenas domiciliarias, 4 ya cumplieron condena y se encuentran en este momento en libertad y 6 son profesionales (abogados, salud mental y fuerza pública). También se acudió a la ciudadanía para conocer su opinión con el fin de extraer algunas observaciones que tiene la sociedad al respecto.

Con el fin de conocer, analizar y evaluar las evidencias que se obtuvieron durante el estudio y así plantear estrategias que contribuyan al mejoramiento de responsabilidades frente a la función reintegradora de la pena, se consideró el tipo de investigación aplicada, mediante el método jurídico-descriptivo, ya que las bases de este documento están fundadas en la búsqueda bibliográfica y en conceptos jurídicos existentes.

III. HALLAZGOS Y RESULTADOS

La responsabilidad estatal se observa desde la omisión del cumplimiento de la función reeducativa de la pena, por lo que se podría determinar que es objetiva o sin falta. Así pues, los presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado dependen del análisis sistemático y riguroso de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para establecer el régimen aplicable en cada caso en concreto. En este sentido, para declarar la responsabilidad del Estado se debe prescribir para el caso del régimen subjetivo, también denominado responsabilidad con falla o falta, un hecho dañoso caracterizado por la acción o la omisión de las autoridades, y para el caso del régimen objetivo, que en virtud de una actividad legítima de la administración, se le imponga al administrado una carga que jurídicamente no está en obligación de soportar.

La jurisprudencia de lo contencioso administrativo sostiene que el título de imputación aplicable a los perjuicios que se lleguen a causar a las personas privadas de la libertad es de naturaleza objetiva. Cabe resaltar que en algunos casos el título de imputación aplicable a los daños padecidos por los reclusos, derivados de la prestación del servicio de salud por parte del establecimiento carcelario, será de naturaleza subjetiva, sustentada en la falla en la aplicación de los servicios prestados a las personas privadas de la libertad como sujetos que se encuentran en situación particular, en las mismas condiciones de calidad, oportunidad, efi-

cacia y eficiencia de las que no lo están, en virtud de las relaciones de especial sujeción con el Estado.

Por otra parte, si bien es cierto en el sistema penitenciario se recurre a la responsabilidad del Estado como un garante frente a los derechos humanos de los presidiarios en tres aspectos: 1) al momento de dar sentencia, 2) durante el cumplimiento de la pena y 3) una vez cumplida la pena. Este último hace referencia explícita a la rehabilitación como un derecho del recluso y un deber del Estado, con la intención de responder a las necesidades y proporcionar los medios precisos para su desarrollo durante el proceso de reincorporación, bajo el manto de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política colombiana.

Es importante precisar que, si bien se reconoce una cierta responsabilidad individual por parte de la persona privada de la libertad en asumir de manera autónoma su proceso de readaptación social, es el Estado el que debe garantizar a la sociedad —más allá de una exigencia ética o moral— las condiciones de seguridad, estabilidad e integridad necesarias para una convivencia pacífica, tanto a nivel local como nacional e internacional. En este sentido, la política criminal se debe concebir de manera integral, abordando no sólo la prevención y sanción del delito, sino también las necesidades y problemáticas de todos los sectores sociales, con especial atención a los más vulnerables, quienes suelen estar más expuestos a contextos de violencia y criminalidad.

Así las cosas, la política criminal no puede limitarse exclusivamente a la función punitiva, sino que debe orientarse a la protección efectiva de los derechos fundamentales y a la construcción de una sociedad más justa e incluyente.

Las personas que están reclusas en centro penitenciario, se encuentran en un estado de debilidad manifiesta, puesto que se les ha limitado el derecho de la libertad, razón por la cual el Estado tiene la responsabilidad directa de salvaguardar su integridad física, su dignidad humana y seguridad jurídica (Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2001).

Ahora bien, la responsabilidad por omisión es objetiva y directa, porque no requiere la determinación de responsabilidad personal del agente estatal. No se mira quién cometió la falta, sino que existió la misma y debe ser reparada por el Estado.

En otro sentido, y como una forma de responsabilidad del Estado, se planteó posteriormente la teoría de la responsabilidad directa de la administración, en cuanto a que existía la obligación de las personas jurídicas públicas de indemnizar perjuicios, ya no con fundamento en los hechos ajenos, sino en los hechos propios, es decir, que la actuación, así se desarrollara por algún servidor de la administración, se consideraba como propia de la misma, con fundamento en un criterio de unidad entre el funcionario y la entidad pública

como lo establece el Código Civil Colombiano en el artículo 2341, que plantea el criterio de responsabilidad por los hechos propios.

En el marco de las realidades de los centros de reclusión y para establecer el grado de responsabilidad del Estado colombiano en el cumplimiento de la función rehabilitadora de la pena, se realizaron 16 entrevistas a personas en cumplimiento de condena en modalidad casa por cárcel, pero que antes estuvieron entre 6 y 7 meses en un centro penitenciario. Al respecto, las respuestas y relatos más frecuentes estuvieron enfocados en los talleres que ofrecen, que en general no les gustan, por lo que escogían los que les parecían más entretenidos, como los de manualidades. Otros manifestaron que los ofrecidos por el Sena eran interesantes, pero no tenían cómo llevarlos a la práctica durante su estancia en el centro penitenciario.

Así mismo, expresaron que algunos talleres eran interesantes, pero no los entendían. Se evidenció falta de técnica y pedagogía de enseñanza-aprendizaje por parte de los formadores; temores al cumplir la condena de no conseguir trabajo por los antecedentes en la hoja de vida; aspiraciones al cumplir la condena, de poder crear su propio negocio; sugerencias para el sistema reeducativo de la pena, llevar más oportunidades de aprendizaje y cursos con el Sena acorde a sus gustos; la expectativa sobre la forma como pueden contribuir al desarrollo de su comunidad y familia. La mayoría de los

entrevistados tienen una gran inclinación por la informática y la tecnología; algunos manifestaron interés en la agricultura y la transformación de alimentos.

Adicionalmente, se observaron destrezas e intereses laborales y de aprendizaje en sectores productivos y sostenibles que el Estado no está aprovechando para enfocar de manera integral los procesos de reinserción. Posteriormente, se consultó a 20 personas que ya habían cumplido su condena si deseaban participar del estudio, pero no fue posible. La negativa a hablar de esa experiencia es radical, pues manifiestan no querer recordarla porque vivieron y presenciaron situaciones desagradables; además, la mayoría cumplieron condenas no justificadas, y otras por delitos menores que no se deberían cumplir en centros penitenciarios.

Lo que da cuenta de que el hacinamiento en los centros carcelarios se presenta muchas veces por el indebido seguimiento a este tipo de condenas, la negligencia de los funcionarios al no realizar periódicamente la caracterización de las penas y el no buscar soluciones estratégicas en el marco de la ley que le hagan frente a la sobrepoblación y a las condiciones infrahumanas prestas al interior de estos centros, que vulneran los derechos fundamentales de los internos.

Es evidente que la reincidencia denota el mal manejo del sistema penitenciario y carcelario, en cuanto a que deberían diseñar un sistema de resocialización de la pena articulado e inte-

gral, pues el derecho a la educación y a la salud están tan desvirtuados en el escenario de la reincorporación, que los reclusos se apuntan a cualquier programa para purgar su condena, los cuales no les incentivan para querer rehabilitarse y servir positivamente a la sociedad, ni les permiten aprender oficios que les puedan ayudar en sus procesos tanto laborales como personales y mentales. Se identifica una ausencia de la dignificación como parte de la rehabilitación para su posterior integración en la sociedad.

Como se mencionó, la reintegración social es una responsabilidad para el aparato estatal, que debe y tiene que iniciarse desde el interior de las cárceles, desde la sociedad con la que se está conviviendo y no debe establecerse como una forma de supervivencia, sino que incite a una autonomía de responsabilidad social que ellos deben asumir.

Además, se realizaron entrevistas a profesionales de la salud mental (psicóloga y psicóloga clínica), a abogados penalistas especializados en derechos humanos, a funcionarios de las personerías de la ciudad de Bogotá y otros municipios aledaños, y a algunos pospenados.

En general, los profesionales del derecho coinciden en que los procesos de reincorporación se dan a partir de lo que se ha evidenciado como ministerio público, que son garantes del comportamiento de los privados de la libertad en los establecimientos carcelarios. Se determina que realizan actividades académi-

cas y de emprendimiento, en los que tienen la posibilidad de estudiar primaria, secundaria y algunas carreras técnicas; además, pueden realizar algunas labores en la creación e implementación de trabajos manuales como artesanías y demás. Claramente, estos procesos pueden ser un eje significativo de cara a la reeducación y posterior reinserción a la vida civil. Es decir, desde el trabajo y el estudio.

En cuanto al perfil del penado, en entrevistas que se realizaron en el municipio de Fusagasugá a funcionarios de la personería municipal con respecto a los beneficios, atenuantes o prerrogativas dentro del proceso penal de los reclusos frente a su proceso de readaptación, expresaron lo siguiente:

Las salidas no se les otorgan a todos, dado que están enmarcadas en una serie de trámites: uno, proceso de libertad condicional, y dos, el proceso de domiciliaria. Estos procesos deben estar regulados a partir de un comportamiento y un concejo de disciplina en el que la Personería Municipal, el director de la cárcel y la jurídica del penal determinan el comportamiento del penado para que el juez de control de garantías pueda determinar posteriormente si la persona es apta para adquirir o ser beneficiado de estas ventajas que otorga ley penal colombiana. Es un debido proceso que va desde la oficina jurídica del Inpec, existe una transversalidad con el ministerio público y finalmente lo decide un juez penal.

Otros profesionales del derecho manifiestan que los agresores sexuales no tienen permitido el beneficio de subrogados penales, debido a la clase de delito cometido. No obstante, algunos reclusos son evaluados en su comportamiento, trabajo y estudio. Se realiza una ruta de seguimiento por psicólogos y psiquiatras, lo cual en la práctica se lleva a cabo en algunos centros de reclusión penitenciaria. Aseguran que un juez tiene la responsabilidad de determinar si se les otorga estas salidas u otros beneficios dentro del proceso de readaptación social a través de un dictamen médico-psiquiátrico.

Respecto al fracaso de la función resocializadora de la pena, todos los entrevistados coinciden en que el presupuesto para prestar la asistencia médica, psicológica y psiquiátrica a los reclusos debe ser suficiente para invertir en una infraestructura que garantice los procesos de educación, trabajo y formación, que lamentablemente son escasos, toda vez que los recursos económicos para los centros penitenciarios provienen de los impuestos recaudados por el Estado (8 millones de pesos por cada recluso).

En cuanto al concepto de institucionalidad con las múltiples flexibilidades que hay en los penales nacionales, se evidencia que en la jurisdicción de algunos municipios el establecimiento hace las cosas debidamente, respetando la dignidad humana de los presidiarios, pero infortunadamente en otros establecimientos penitenciarios se

propician situaciones de actividad ilegal e inconsistencias como corrupción, tráfico de influencias, entre otros eventos, que hacen que el privado de la libertad no tenga la misma igualdad con respecto a sus pares, incurriendo en inconformidad y malestar en el proceso de reinserción, fragmentándolo y viciándolo.

En cuanto a la responsabilidad del Estado frente a la función rehabilitadora de la pena, el concepto de los entrevistados es absoluto. Es el Estado el que define y proporciona los recursos, las condiciones, los parámetros y los criterios necesarios para que los establecimientos penitenciarios, bajo la orientación del Ministerio de Justicia, implementen las directrices y estrategias destinadas a garantizar un proceso de reeducación adecuado, idóneo y eficaz para las personas privadas de la libertad.

Sin embargo, en la práctica, esta función resocializadora no se cumple de manera efectiva. La ausencia de una infraestructura adecuada, programas educativos y condiciones mínimas para la rehabilitación impide alcanzar los fines esperados. Por el contrario, se observa una vulneración sistemática de los derechos fundamentales de los internos, que se evidencia en las precarias condiciones de salubridad, el hacinamiento, la falta de higiene y otras deficiencias estructurales que imposibilitan cualquier proceso real de reintegración social. Algunos ciudadanos consultados sobre a quién se le atribuye la responsabilidad de conceder permisos a personas condenadas

por delitos sexuales o asesinato, estuvieron de acuerdo en responder que esto le atañe al Estado.

No obstante, otros aluden que es un tema controversial, teniendo en cuenta la coyuntura y la casuística que se ha presentado en la historia del contexto nacional. Cuando una persona ha cumplido su condena y puede obtener el beneficio de no estar expiando su pena intramuralmente, ya sea por algún subrogado penal (domiciliaria o libertad condicional), le corresponde a un juez determinar y analizar exhaustivamente si dicho individuo es un peligro para la sociedad, ya que no se está hablando de permisos espontáneos sino de procesos que la ley penal puede conceder a partir de un comportamiento o un cumplimiento de la pena dentro del establecimiento carcelario; por tanto, la responsabilidad es solidaria tanto desde la institucionalidad como del ente gubernamental, así como de la jurisdicción ordinaria y los entes de control que regulan estas calificaciones del penado y la situación jurídica de la persona.

Ahora bien, es cierto que la situación de acceso a la salud mental de los reclusos es nula, la responsabilidad de garantizar el acceso a los servicios básicos de salud y los relacionados con el proceso de reincorporación a la sociedad apuntan al Inpec, pues es la entidad encargada de atender los asuntos de los internos y velar porque se cumpla con los procesos dentro de los establecimientos carcelarios.

Los profesionales del derecho consultados sobre las inconsistencias del Código Penal manifiestan que existen muchas contrariedades, irregularidades y vacíos normativos respecto a la tipificación de delitos y que conforme a estos se deben implementar penas más severas (en los casos de delitos sexuales y con coyuntura mental). Sostienen, además, que se debe invertir en el régimen carcelario (infraestructura física, en los programas de reinserción y en personal del área de la salud mental).

Por lo general, en la mayoría de los casos, de acuerdo con las respuestas, se establece que no todos los centros de reclusión cuentan con las herramientas ni la estructura adecuada para cumplir eficazmente con los procesos de readaptación social. De ahí que la población que se reincorpora en debida forma a la sociedad es mínima y el perfil criminal sí cuenta para garantizar el fin rehabilitador de la pena, sustentándose desde el enfoque psicológico, clínico y psicosocial.

Se advierte que la ineficacia en la función reintegradora de la pena va más allá de ésta, pues el sistema penitenciario y carcelario de Colombia incurre constantemente en un estado de cosas inconstitucionales, debido a los fenómenos de hacinamiento, a las actividades de ilegalidad en todas sus formas al interior de las prisiones, a las agresiones violentas entre reclusos y por parte de los funcionarios del Inpec hacia las personas privadas de la libertad, en adelante PPL, al poco seguimiento de las etapas de observación, diagnóstico y cla-

sificación del interno, y a la de seguimiento del Programa del Tratamiento Penitenciario (PTP), especialmente en la fase de mediana seguridad en la que inciden diferentes fallas al momento de no clasificar claramente la conducta del reo conforme al delito cometido y por el cual se encuentra purgando en el centro penitenciario.

Adicionalmente, en Colombia no se puede asumir que todos los condenados tomen para sí la reintegración a la sociedad como una garantía de mejoramiento de su conducta y mucho menos que algunos reclusos sean sujetos de cambio, dada su condición mental y el tipo de delito.

Desde un enfoque de la psicología clínica y la psicología del desarrollo, es imperioso determinar las condiciones que determinan si un presidiario está reincorporado a la sociedad o no y si existe alguna posibilidad de que un agresor sexual o un asesino se rehabilite. Eso sólo se puede establecer cuando esté privado de la libertad (PL) asumiendo que ha hecho algo inapropiado dentro de la sociedad, transgrediendo lo señalado por las leyes y que palmariamente debe aplicar para una pena, a partir de una conducta mal ejecutada y un patrón que el sujeto ya viene manifestando, posiblemente desde su infancia o adolescencia.

En este marco, se habla de que algunas variables como abuso, violencia física y violencia intrafamiliar invisibilizarían desde la niñez, además de otros factores sociales aprendi-

dos por el privado de la libertad. Qué sucede con esta clasificación de patrones para que una persona esté resocializada dentro de un ambiente vulnerable (violación de los derechos de los privado de la libertad, violencia, corrupción, desigualdad), en los que no hay una rehabilitación propiamente dicha y las personas se ven muy limitadas, debido al escenario con pocas condiciones integrales para realizar los procesos de readaptación social, además de la poca oferta y el poco acceso a los programas de rehabilitación (educación).

Igualmente, los espacios de terapia orientados por psicólogos clínicos especializados son demasiado restringido. Cada institución penitenciaria debería contar con un equipo de profesionales para trabajar directamente con los patrones de las conductas y mentales que hayan desarrollado estos pacientes, así como el acompañamiento de psiquiatras que puedan trabajar desde la medicación.

Las PPL deberían tener espacios físicos donde puedan acceder a la recreación y el deporte de manera obligatoria, que es una forma de contribuir en el tratamiento de estos sujetos para ayudar a bajar los niveles de cortisol, porque una persona en estas condiciones genera ansiedad, estrés y se torna hostil.

Primero, deben ocuparse de los pensamientos junto con los patrones cognitivos de los pacientes privados de la libertad, porque si estas personas no trabajan con los patrones de la conducta, entendiéndolo desde la terapia cog-

nitiva o conductual, que es un enfoque basado en la modificación de la conducta del sujeto, no se logra ese cambio de comportamiento y mucho menos serán sujetos de cambio.

Por tanto, no se puede trabajar una conducta sin antes concientizar al paciente de que sus actos no fueron los mejores, debe aceptar que necesita mejorar, sanar interiormente, aprendiendo a perdonar y a perdonarse, aprender algunas lecciones de vida de una forma diferente, pues una persona no puede vincularse o reintegrarse a una sociedad si vive en un ambiente hostil al interior del centro de reclusión y no ha tenido un tratamiento terapéutico, un trabajo en salud mental con especialistas en esas disciplinas. Por ende, la corrección de estos patrones no se verá reflejada cuando el sujeto salga, porque habrá una reincidencia del delito a partir de esos lugares de reclusión, donde la mayoría de veces llegan a aprender a delinquir más y a sobrevivir.

En este entendido, es necesario cuestionarse ¿cuál es la responsabilidad del Estado colombiano por la omisión en la función resocializadora de la pena? Es viable afirmar que se puede dar una resocialización en medio de un ambiente lleno de violencia, de corrupción, limitado de educación, en el que se comparten actos delictivos y que da lugar a un aprendizaje vicario, modelado y, generado por lo que se escucha, ve y vive al interior de los centros de reclusión.

Por consiguiente, la reincorporación en la sociedad nunca se dará de manera satisfac-

toria si la estructura de los programas y la ejecución de los tratamientos penitenciarios a los privados de la libertad no se proporciona y realiza de manera correcta. Es decir, la ejecución y aplicabilidad de los adecuados tratamientos terapéuticos deben estar dirigidos y orientados por especialistas en salud mental. Si no existe un tratamiento apropiado, en el entendido de que no es bajo el castigo, sino con un tratamiento terapéutico especializado (psicólogos clínicos y psiquiatras), en el que exista una inclusión en la educación, con el fin de apoyar los ambientes de aprendizaje y que sean de obligatorio cumplimiento y asistencia.

Respecto a la efectividad de los programas de reintegración, el trabajo positivo debe estar orientado al plano de la salud mental del recluso. Es necesario un trabajo individual que permita entender su pasado e identificar sus sentimientos y pensamientos, escucharlos, pues muchos de ellos carecieron de afecto en el hogar, no les enseñaron principios y valores para vivir en coexistencia e integrarse como una persona normal. Las charlas introductorias son obsoletas e innecesarias, no prestan ningún tipo de apoyo, se tornan aburridas y no generan ningún impacto en las PPL; por tanto, se desperdicia un espacio que podría aprovecharse de otra manera más productiva.

Ahora bien, los programas dirigidos a los privados de la libertad deben estar apoyados por un equipo especializado, no de base, porque no

se trata de aconsejar, dar sugerencias o subir la autoestima del penado, se trata de conocer la raíz del problema e identificar los patrones de cada uno de los pacientes. También se requiere ampliar el escenario educativo, teniendo en cuenta que estas personas, en su mayoría, tienen bajos índices de educación. Este proceso debe ser integral, asociado al trabajo, con un objetivo en claro y real en la transformación, que afiance de manera progresiva la adaptación a nuevos procesos de vida, de pensar y de actuar, con el fin de que sean productivos para la sociedad una vez culminen su proceso de reintegración. En este orden de ideas, la efectividad de la reincorporación se encuentra en la psicoeducación, medicación e intervención conductista.

Los esfuerzos que el Estado ha hecho frente a la reinserción no son suficientes, puesto que los procesos de rehabilitación social se sitúan dentro del sistema penitenciario como un medio multiplicador de conflictos, porque estimulan la pereza y no les permite ocupar la mente en cosas productivas.

En ese sentido, la función resocializadora de la pena en Colombia ha sido objeto de amplias reflexiones críticas por parte de la doctrina nacional. Acosta Díaz y López López (2015) sostienen que, aunque el ordenamiento jurídico colombiano contempla la resocialización como uno de los fines primordiales de la pena, en la práctica este ideal se ve debilitado por la falta de políticas integrales y sostenidas que garanticen una verdadera reintegración social del condenado (p. 183).

En línea con esta perspectiva, Chávez Barre-ra y Sarmiento Caviedes (2021) profundizan en los factores que inciden directamente en el fracaso de los procesos de resocialización, identificando carencias estructurales como el hacinamiento carcelario, la ausencia de programas educativos efectivos y la precariedad en el acceso a oportunidades laborales dentro del sistema penitenciario (pp. 36-38). Ambos trabajos coinciden en que la distancia entre el marco normativo y la realidad penitenciaria impide que la pena cumpla con su objetivo rehabilitador, perpetuando un sistema que, lejos de reinsertar, reproduce condiciones de exclusión social.

Entonces, entre los factores influyentes para que una readaptación social no funcione es la forma como se está trabajando dentro del sistema penitenciario, los PL deberían estar obligados a ocupar su mente y tiempo integrándose en los programas que oferta el centro de reclusión. De igual manera, la cobertura debería abarcar a toda la población del centro, y por supuesto, contar con un equipo integral de salud mental para atender los casos de pacientes mentales. Otro factor que influye drásticamente en la no readaptación es la demora en dar respuesta, entre 7 y 8 meses, para la apertura de cursos o talleres y para ser tenidos en cuenta e incorporarse a estos. Adicionalmente, los funcionarios del Inpec les cobran a los presos para que sean incluidos en una lista prioritaria y poder acceder a algún tipo de trabajo dentro de la cárcel.

Por tanto, no existen elementos que contribuyan al fortalecimiento de la función reeducativa, percibiendo un panorama desfavorable en cuanto a los siguientes factores que impiden la reinserción de manera eficaz: hacinamiento; programas y talleres improductivos, que para PL con patologías mentales no son viables ni garantizan su proceso de reinserción; corrupción; no existe un equipo integral de profesionales o expertos en salud mental en los centros de reclusión, como psicólogos clínicos y psiquiatras; no se tipifican los delitos ni se clasifica el perfil criminal del PL pese a que en la primera etapa resocializadora existe la observación, el diagnóstico y la clasificación del delito, lo cual no se ejecuta realmente, dejando una gran brecha en el debido proceso de reincorporación.

En consecuencia, los sistemas penitenciarios están mal enfocados, debido al precario manejo de la salud mental, la concepción de un tratamiento orientado a la forma como se deben proyectar esas personas para que se eduquen mejor y a la modificación de conductas, lo cual se debe contemplar en la modificación de patrones del pensamiento y en las variantes de los patrones cognitivos.

En este punto, prevalece la discusión en torno al planteamiento de propuestas sobre programas para hacer efectiva la reincorporación y la importancia de la articulación de distintos escenarios, como los convenios intereducativos y áreas profesionales (educación, judicial,

psicología y psiquiatría), y sugerir quiénes deberían estar a cargo de los procesos de reincorporación. Así mismo, se debe hacer una caracterización sobre las habilidades y capacidades de los presos y cruzarlas con las necesidades e intereses tanto del recluso como de la sociedad.

La intensificación de las penas, es decir, mantener bajo custodia a presos por delitos que, según la disciplina de la salud mental, son imposibles de rehabilitar y aún representan y seguirán representando un peligro inminente para la sociedad.

Exigir a los centros penitenciarios intensificar las medidas de readaptación de manera articulada con las áreas de la salud mental y jurídicas con el fin de garantizar y tener la certeza de que este proceso individual haya sido efectivo; no obstante, se les debe dar continuidad y seguimiento posterior a su cumplimiento de la pena, es decir, que el proceso se mantenga durante los dos primeros años de libertad para evitar la reincidencia.

Diversos autores y profesionales de las áreas de la salud mental y del derecho plantean insistentemente una reforma de ley al Código Penal, en la que se propongan criterios socio-jurídicos que permitan alcanzar el equilibrio socio-estatal y contribuyan con los fines del Estado. Toda vez que, desde el año 1998, aproximadamente, hasta el día de hoy se perciben graves falencias en el sistema carcelario colombiano, como hacinamiento, ausencia de

servicios públicos y de salud. Adicionalmente, en los centros penitenciarios se presentan delitos referentes a la extorsión, violencia entre reclusos y corrupción por parte de los funcionarios carcelarios, lo cual llevó a declarar en el 2013 una emergencia carcelaria, con un índice considerable de reinserción (Acosta y López, 2015).

IV. CONCLUSIONES

Los programas de rehabilitación tienen como finalidad la reinserción social del individuo, en tanto dichos programas sean efectivos la reincidencia disminuirá. Sin embargo, en Colombia esto aún es un tema pendiente, ya que debido a la sobrepoblación carcelaria no existe la logística necesaria para integrar a todos los reclusos a programas de resocialización, además de replantear dichos programas de acuerdo con las necesidades evidenciadas dentro de la población carcelaria.

En un Estado Social de Derecho, basado en la dignidad humana, la ejecución de las penas debe tener una función de prevención especial positiva. En esta fase debe buscarse, ante todo, la readaptación del condenado, dentro del respeto de su autonomía y dignidad.

factores como la precaria implementación de políticas penales, la corrupción y los bajos presupuestos invertidos en infraestructura penitenciaria y estudios de caracterización sobre reincidencia de delitos han provocado que el sistema penal no logre su propósito de ree-

ducación. Por esta razón urge un modelo que vaya más allá de las necesidades del reo y la sociedad, para explorar e identificar las habilidades, capacidades y gustos de la población condenada, y con base a ellas crear programas productivos y sostenibles dentro y fuera de los centros penitenciarios. De esta manera se garantizan los procesos de rehabilitación social, iniciando desde el interior de las cárceles hacia la sociedad.

Es necesario involucrar a las entidades de los sectores salud, educación, penal, cultural y demás pertinentes a estos procesos, mediante actividades y estrategias articuladas con los sectores públicos y privados, con el fin de crear una cultura de corresponsabilidad interinstitucional en pro de una reintegración social eficaz.

Lo expuesto implica que los sujetos sometidos a una relación de sujeción especial con el Estado podrán hacer valer sus derechos en miras a obtener las oportunidades necesarias y los medios precisos para el desarrollo de su personalidad humana, con el fin de que se les garantice una vía para la rehabilitación.

En ese sentido, se propone a los involucrados que es importante e indispensable planear, estructurar e implementar dentro de la política pública de reeducación de la pena programas académicos transversales a lo laboral, que sean productivos y sostenibles dentro y fuera del centro de reclusión, y que garanticen los derechos de los reos, en la medida en que sean afines con sus capacidades, habilidades,

gustos y necesidades, y que abarquen al 100 % de esta población.

Para lograr esto es pertinente replantear y hacer una revisión juiciosa y exhaustiva de la política pública de rehabilitación de la pena, así como de las condiciones de infraestructura física penitenciaria y sus servicios en general.

V. RECOMENDACIONES

Para los casos que se mencionan a continuación, se sugiere reforzar y fortalecer las instancias y escenarios sobre la función resocializadora de la pena y la responsabilidad que representa para el Estado en cuanto a su eficacia y efectividad.

Caso 1. Sobrepoblación carcelaria. Este es uno de los desafíos más recurrentes en el sistema penitenciario colombiano. Este problema ha llevado a debates sobre la responsabilidad del Estado para garantizar condiciones dignas de reclusión que promuevan la reinserción. Cuando la sobrepoblación afecta negativamente la implementación de programas de rehabilitación, se puede argumentar que el Estado no está cumpliendo adecuadamente su función resocializadora.

Caso 2. Acceso a programas de educación y trabajo. La reeducación implica brindar a los reclusos oportunidades de educación y capacitación laboral. Los debates sobre si el Estado proporciona adecuadamente estos programas pueden surgir en situaciones en las que

los reclusos no tienen acceso a educación o formación laboral que les permita adquirir habilidades para su reintegración. La falta de recursos o de ineficiencia en la implementación de estos programas pueden plantear cuestionamientos sobre la responsabilidad estatal en la rehabilitación.

Caso 3. Violación de derechos humanos en prisiones. Los casos en los que se denuncian violaciones de derechos humanos en prisiones, como tortura, tratos inhumanos o condiciones precarias, plantean cuestiones sobre la responsabilidad del Estado en garantizar condiciones de reclusión que fomenten la readaptación. Estos casos pueden argumentar que el trato inadecuado dificulta la rehabilitación y reinserción de los reclusos.

Caso 4. Falta de programas de rehabilitación para grupos vulnerables. Los debates sobre la responsabilidad estatal en la reinserción también pueden centrarse en grupos específicos de reclusos, como jóvenes, mujeres, personas con discapacidad o población indígena. Si estos grupos no tienen acceso a programas de rehabilitación adecuados que tengan en cuenta sus necesidades particulares, se puede argumentar que el Estado no está cumpliendo con su función rehabilitadora de manera equitativa.

Caso 5. Efectividad de la rehabilitación en la prevención de la reincidencia. Se pueden presentar debates sobre si los programas de

reintegración realmente cumplen su objetivo de reducir la reincidencia delictiva.

Si existe evidencia de altas tasas de reiteración en consumir conductas punibles entre los liberados, puede plantearse la cuestión de si el Estado está cumpliendo efectivamente con su función de readaptación y si se están asignando los recursos adecuados para lograr este objetivo. Por lo tanto, para brindar el tratamiento requerido se recomienda utilizar como indicador efectivo la disminución de reiteraciones en dichos delitos, para determinar la eficacia de los procesos y los programas de reinserción orientados a:

1. La revaluación de las políticas públicas implementadas, su presupuesto, el impacto de los programas asignados en la población reclusa, los profesionales contratados y los entes de control que realizan el seguimiento a estos procesos y su desarrollo.
2. Realización de test de intereses, competencias y habilidades a los reclusos. Y conforme a esto, aplicar el programa correspondiente.
3. Reevaluar las condenas y el tipo de programas para los reclusos con patologías mentales (agresores sexuales, sociópatas, psicópatas, etc.).
4. Acondicionar e invertir en la infraestructura física, penitenciaria y carcelaria (más inversión, más gestión de recursos internacionales).

REFERENCIAS

- Acosta Díaz, N., & López López, J. L. (2015). La resocialización en el derecho penal colombiano. *Democratia Nova*, 4, 180-207. https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/demo_nova/article/view/4691.
- Chávez Barrera, A., & Sarmiento Caviedes, K. (2021). Factores determinantes del fracaso de la resocialización en Colombia [tesis de grado, Universidad Libre de Colombia]. <https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/20427>.
- Contreras Lizcano, F., & Sandoval Blanco, J. (2020). Efectividad de la reclusión de un condenado en un establecimiento carcelario para su resocialización [tesis de especialización, Universidad Libre de Colombia]. <https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/19962>.
- Congreso de Colombia (n.d.). *Código Civil: Artículo 2341 – Responsabilidad extracontractual*. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=285>.
- Congreso de Colombia (1993, agosto 20). *Ley 65 de 1993: Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario*. *Diario Oficial*, 40.999. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1207>.
- Corte Constitucional de Colombia (2015, diciembre 16). Sentencia T-762/15 (M. S.

- G. S. Ortiz Delgado). <https://www.corte-constitucional.gov.co/>.
- Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sala de Casación Penal (2013, febrero 27). Sentencia SP33254-2013 (M. P. J. L. Bustos Martínez). <https://www.cortesuprema.gov.co/>.
- Cucanchón Rodríguez, J. (2022). La justicia terapéutica y su implementación en el ordenamiento jurídico colombiano. Revisión de la literatura [tesis de especialización, Universidad Santo Tomás de Aquino, Colombia]. <https://repository.usta.edu.co/handle/11634/46016>.
- Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia (2020). Lineamientos de resocialización con enfoque de justicia restaurativa: Dirección de Política Criminal. Recuperado de <https://www.politicacriminal.gov.co/Portals/0/PublicacionesPC/Lineamientos%20de%20resocializacion%20con%20enfoque%20en%20JR.pdf>.
- Morineau, O. (1953). *El estudio del derecho*. México: Porrúa.
- Pina Vara, R. (1980). *Elementos del derecho civil mexicano* (Vol. 1). México: Porrúa.
- Tantaleán Odar, R. M. (2016). *Tipología de las investigaciones jurídicas*. Derecho y Cambio Social. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5456267.pdf>.